



Expresidentes en el banquillo

El último informe de Transparencia Internacional (TI), correspondiente a 2004, revela los casos de varios ex presidentes y dos mandatarios en funciones, que han sido involucrados en casos de corrupción en América Latina, además del juicio a Miguel Ángel Rodríguez, quien se vio obligado a renunciar a la Secretaría General de la OEA.



Alberto Fujimori expresidente de Perú



Carlos Menem expresidente de Argentina

Entre los mandatarios reflejados en el último informe de Transparencia Internacional (TI) aparece el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, a quien la Contraloría General de este país le solicitó destitución, por negarse a informar sobre el origen de millonarias cuentas bancarias utilizadas durante su campaña electoral en el 2001, lo cual es un delito electoral.

Pero también fue muy sonado el caso del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), - predecesor del actual presidente de Nicaragua- quien fue condenado en primera instancia a 20 años de prisión por el delito de legitimación de capitales, a fines de 2003. Incluso, en Estados Unidos se le aplicó los rigores de la USA Patriot Act.

En Costa Rica, el presidente Abel Pacheco comenzó a ser investigado en el 2003, también por el supuesto financiamiento irregular de su campaña política. En este mismo país, aunque con mayor repercusión en América Latina, ocurrió el caso de quien, el 15 de septiembre de 2004, había sido designado Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), antecesor de Pacheco. Se vio obligado a renunciar al organismo multilateral un mes después, para afrontar una acusación, según la cual, recibió comisiones ilegales de una empresa francesa de telecomunicaciones, Alcatel, durante su mandato presidencial. Al regresar desde Washington a su país, fue inmediatamente detenido y esposado.

Igualmente, en Costa Rica, el ex presidente Rafael Calderón (1990-1994), está señalado en un presunto caso de corrupción con recursos del Seguro Social. Tiene prohibición de salida del país.

En Argentina, el ex presidente Carlos Menem, radicado en Chile, estuvo detenido por varias semanas, por presuntas irregularidades en la venta de armas. Tiene una orden de captura internacional por negarse a declarar en varias de las causas en las que se le investiga.

En Bolivia, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, fue obligado a renunciar a consecuencia de una profunda protesta social. Está siendo investigado por irregularidades en la venta de gas natural, en condiciones consideradas negativas para el país sureño, hacia América del Norte. A finales de 2004, el parlamento boliviano autorizó a la Corte Suprema de Justicia a iniciar un proceso de responsabilidad contra el ex mandatario, quien huyó y vive todavía en Estados Unidos.

En Brasil, la gestión de Collor de Mello, también está siendo investigada por una ola de acusaciones de presuntos casos de corrupción.

Chile es el país con menor indicador de corrupción en América Latina según TI, pero el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) parece ser la excepción, pues además de los delitos por violación de derechos humanos, se le liga a cargos por enriquecimiento ilícito. La investigación está dirigida a ocho millones de dólares guardados en secreto en bancos estadounidenses y de cuyo origen se tienen serias sospechas.

Ecuador tiene el mayor número de ex presidentes que afrontan procesos por irregularidades administrativas. Abdalá Bucaram, lo destituido el Congreso (1977) por "incapacidad mental", en medio de protestas sociales. Vive en Panamá, pero no han finalizado aún los juicios por corrupción y despilfarro de dineros públicos iniciados en su contra. Fabián Alarcón, sucesor interino (1997-1998) de Bucaram, permaneció detenido por seis meses, por la contratación irregular de funcionarios. Luego vino la gestión de Jamil Mahuad (1998-2000), derrocado en medio de movilizaciones sociales indígenas. Actualmente vive en Estados Unidos, pero enfrenta un proceso judicial por abuso de funciones.

Mahuad, fue sustituido por su vicepresidente, Gustavo Noboa (2000-2003), quien salió escabrosamente de Ecuador, luego de ser acusado de corrupción en el manejo de fondos públicos y vive en República Dominicana como exiliado político.

En Guatemala se investiga el caso del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), quien vive en México, pero está siendo investigado por la presunta apertura de varias cuentas bancarias con recursos públicos. Autoridades judiciales del país centroamericano preparan los alegatos para pedir la extradición del ex mandatario.

En el Caribe, el ex presidente de Haití Jean Bertrand Aristide, cuyo mandato fue interrumpido en febrero en medio de movilizaciones violentas en su contra y la intervención de Estados Unidos, es señalado por grupos humanitarios y opositores de corrupción y de ejercer la violencia política.

En Paraguay, que según TI es el país más corrupto de América Latina, se ventila el caso de Juan Carlos Wasmosy, quien gobernó entre 1993 y 1998, fue condenado en primera instancia en abril 2002 a cuatro años de prisión por cometer varias irregularidades, aunque un tribunal de apelaciones lo absolvió en septiembre de 2004. Raúl Cubas, sucesor de Wasmosy, fue denunciado por el uso ilegal de fondos públicos luego de que renunciara al cargo en medio de una revuelta social tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y de siete jóvenes manifestantes en marzo de 1999. Huyó a Brasil y en el 2002 regresó a su país, donde es procesado en libertad. Hasta 2003, Luis González Macchi fue presidente de Paraguay, quien es procesado por el presunto desvío irregular de 16 millones de dólares de liquidaciones bancarias.

El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta desde su residencia en Japón, donde vive desde que renunció vía fax a su tercer mandato consecutivo, un pedido de extradición por acusaciones vinculadas a delitos contra la humanidad y al hurto de dinero públicos.

Carlos Andrés Pérez, gobernante venezolano de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993, fue sentenciado por apropiación de dineros públicos a pena de prisión domiciliaria.

Enrique Bolaños (NICARAGUA)



Fabián Alarcón (ECUADOR)

